Asunto C-197/23**Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

24 de marzo de 2023

Órgano jurisdiccional remitente:

Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia, Polonia)

Fecha de la resolución de remisión:

28 de abril de 2022

Parte demandante:

S. S.A.

Parte demandada:

C. sp. z o.o.

Objeto del procedimiento principal

Recurso de apelación contra la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia, que desestimó la demanda en reclamación de cantidad de 4 572 648,00 eslotis polacos (PLN) más los intereses, presentada por S. S.A. contra C. sp. z o.o. sobre la base del artículo 15, apartado 1, punto 4, de la ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ley relativa a la Lucha contra la Competencia Desleal), de 16 de abril de 1993.

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Interpretación de los artículos 2, 6, apartados 1 y 3, y 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las cuestiones prejudiciales se han planteado con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Cuestiones prejudiciales

1. ¿Deben interpretarse los artículos 2, 6, apartados 1 y 3, y 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que no es un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, que garantice la tutela judicial efectiva, un órgano jurisdiccional de primera instancia de un Estado miembro de la Unión Europea, cuya formación unipersonal esté compuesta por un juez de dicho órgano jurisdiccional que ha sido designado para examinar un asunto con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales?

2. ¿Deben interpretarse los artículos 2, 6, apartados 1 y 3, y 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a la aplicación de disposiciones de Derecho nacional, como el artículo 55, apartado 4, segunda frase, de la ustawa z 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych [Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, de 27 de julio de 2001 (texto refundido: Dz.U. de 2020, posición 2072, en su versión modificada)], en relación con el artículo 8 de la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2019 [Ley por la que se modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y Otras Leyes, de 20 de diciembre de 2019 (Dz.U. de 2020, posición 190)], en la medida en la que prohíben al órgano jurisdiccional de segunda instancia declarar, con arreglo al artículo 379, punto 4, de la ustawa z 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego [Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil, de 17 de noviembre de 1964 (texto refundido: Dz.U. de 2021, posición 1805, en su versión modificada)], la nulidad del procedimiento tramitado en un órgano jurisdiccional de primera instancia en un asunto iniciado ante este, debido a que la composición de dicho órgano jurisdiccional es contraria a la ley, de que el órgano jurisdiccional está incorrectamente compuesto o de que forma parte de él una persona que no está facultada o que no es competente para ejercer la jurisdicción, como sanción jurídica que garantiza la tutela judicial efectiva en caso de que se haya designado un juez para conocer de un asunto con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Tratado de la Unión Europea: artículos 2, 6, apartados 1 y 3, y 19, apartado 1, párrafo segundo

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: artículo 267

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: artículo 47

Jurisprudencia y disposiciones de Derecho nacional invocadas

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ley relativa a la Lucha contra la Competencia Desleal), de 16 de abril de 1993 (texto refundido: Dz.U. de 2022, posición 1233): artículo 15, apartado 1, punto 4

Ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil), de 17 de noviembre de 1964 (texto refundido: Dz.U. de 2021, posición 1805, en su versión modificada) (en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Civil»): artículos 47, apartado 1, 59, 232, segunda frase, 323, 378, apartado 1, 379, punto 4, y 386

Con arreglo al artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil, citado en la segunda cuestión prejudicial, «el procedimiento será nulo cuando la composición del tribunal que conozca del asunto sea contraria a la ley o cuando un juez sujeto a exclusión haya participado en el examen del asunto».

Ustawa — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001 (texto refundido: Dz.U. de 2020, posición 2072, en su versión modificada) (en lo sucesivo, «Ley de los Tribunales Ordinarios»): artículos 45, 47a, 47b y 55, apartado 4

Con arreglo al artículo 55, apartado 4, de la Ley de los Tribunales Ordinarios, citado en la segunda cuestión prejudicial, «el juez podrá pronunciarse sobre todos los asuntos en el lugar en el que estén afectados y en otro órgano jurisdiccional en los casos determinados por la ley (competencia del juez). Las disposiciones relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales no limitarán la competencia de los jueces y no podrán ser invocadas para que se declare que la composición de un órgano jurisdiccional es contraria a la ley, que un órgano jurisdiccional está incorrectamente compuesto o que forma parte de este una persona que no está facultada o que no es competente para ejercer la jurisdicción».

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw [Ley por la que se modifican la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, la Ley del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y Otras Leyes], de 20 de diciembre de 2019 (Dz.U. de 2020, posición 190; en lo sucesivo «Ley modificativa»): artículos 1 (que añadió el apartado 4 al artículo 55 de la Ley de los Tribunales Ordinarios con el tenor anteriormente citado) y 8

Con arreglo al artículo 8 de la Ley modificativa, citado en la segunda cuestión prejudicial, «lo dispuesto en el artículo 55, apartado 4, de la Ley modificada

mediante el artículo 1 se aplicará asimismo a los procedimientos iniciados o finalizados antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley».

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Decreto del Ministro de Justicia por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de los Tribunales Ordinarios), de 23 de diciembre de 2015 (Dz.U. de 2015, posición 2316; en lo sucesivo: «Reglamento de 2015»): artículos 43, apartado 1, 49, 52b y 52c

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Decreto del Ministro de Justicia por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de los Tribunales Ordinarios, de 18 de junio de 2019 (Dz.U. de 2019, posición 1141; en lo sucesivo: «Reglamento de 2019»): artículos 2, punto 16, 61, apartado 3, y 138, apartado 3

Ustawa — Kodeks pracy (Ley por la que se aprueba el Código de Trabajo), de 26 de junio de 1974 (texto refundido: Dz.U. de 2022, posición 1510): artículos 167² y 167³

Sentencia del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), de 21 de noviembre de 2019, III PK 162/18; resolución del Sąd Najwyższy, de 5 de diciembre de 2019, III UZP 10/19; auto del Sąd Najwyższy, de 28 de febrero de 2020, III CSK 225/19; auto del Sąd Najwyższy, de 12 de enero de 2021, IV CSK 275/20; resolución del Sąd Najwyższy, de 16 de febrero de 2021, III CZP 9/20; auto del Sąd Najwyższy, de 2 de junio de 2021, V CSK 52/21; auto del Sąd Najwyższy, de 29 de abril de 2022, III CZP 77/22; resolución del Sąd Najwyższy, de 26 de mayo de 2022, III CZP 86/22

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 El 27 de abril de 2018, la mercantil S. S.A., con domicilio social en S., presentó contra la mercantil C. sp. z o.o., con domicilio social en W., sobre la base del artículo 15, apartado 1, punto 4, de la Ley relativa a la Lucha contra la Competencia Desleal, de 16 de abril de 1993, una demanda en reclamación de cantidad de 4 572 648,00 PLN, más los intereses legales, devengados desde las fechas y por los importes citados en el suplico de la demanda. La demandada solicitó la desestimación de la demanda.
- 2 Mediante diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2018, la presidenta de la Sala XVI, de lo Mercantil, del Sąd Okręgowy w W. (Tribunal Regional de W.) acordó remitir el asunto al Sistema Aleatorio de Reparto de Asuntos (en lo sucesivo, «SLPS»). Según el informe de reparto, el 28 de septiembre de 2018 la jueza E. T. fue designada, mediante sorteo, ponente del asunto XVI GC 932/18.
- 3 Mediante diligencia de ordenación extendida por la jueza E. T. el 30 de enero de 2019, se señaló el 11 de marzo de 2019 como fecha de celebración de la vista. La jueza E. T fue designada presidenta de la formación judicial que conocería del

fondo del asunto. Mediante diligencia de ordenación de 7 de febrero de 2019, la jueza E. T. cambió la fecha de la vista, señalada inicialmente para el 11 de marzo de 2019, al 25 de marzo de 2019. En la diligencia de ordenación no se indicaron los motivos para cambiar la fecha de examen del asunto ni al juez que presidiría la formación judicial que conocería del asunto.

- 4 El 25 de marzo de 2019. se celebró la vista, que fue presidida por la jueza J. K. En los autos del asunto XVI GC 932/18, que abarcan el período comprendido entre el 28 de septiembre de 2018 (fecha en la que fue designada mediante sorteo la jueza E. T. a través del sistema SLPS) hasta el 25 de marzo de 2019 (fecha de la primera vista dirigida por la jueza J. K.), faltan los documentos que expliquen el cambio de juez ponente. Las siguientes sesiones señaladas para llevar a cabo la vista, a saber, los días 8 de julio de 2019 y 2 de septiembre de 2019, se celebraron ante el órgano jurisdiccional de primera instancia formado por la jueza J. K. El 16 de septiembre de 2019, el Sąd Okręgowy w W., que conocía del fondo del asunto en formación unipersonal compuesta por la jueza J. K., dictó sentencia desestimando la demanda. En el sistema SLPS, no se cambió al juez ponente designado para el asunto XVI GC932/18.
- 5 Mediante recurso de apelación de 27 de octubre de 2019, la demandante impugnó en su totalidad la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia. En su oposición al recurso de apelación, el 31 de julio de 2020 la demandada solicitó la desestimación de dicho recurso.
- 6 Habida cuenta de la apelación de la demandante, los autos del asunto XVI GC 932/18 fueron remitidos al tribunal de apelación, asignándoseles el número de expediente VII AGa 738/20. Mediante auto de 11 de mayo de 2021, el Sąd Apelacyjny w W. (Tribunal de Apelación de W.) decidió, con arreglo al artículo 138, apartado 3, del Reglamento de 2019, devolver los autos al Sąd Okręgowy w W. para que aportara a los autos los siguientes documentos: 1) la diligencia de ordenación del presidente o vicepresidente de la sala en virtud de la cual la jueza J. K. fue designada desde el 25 de marzo de 2019 para conocer del asunto como ponente en lugar de la jueza ponente E. T., que había sido designada mediante sorteo, con indicación del fundamento jurídico para asignar ese asunto a la jueza J. K. y de los motivos que justificaron el cambio de composición del órgano jurisdiccional; 2) la diligencia de ordenación del presidente o vicepresidente de la sala en virtud de la cual la jueza J. K., como suplente debido a la ausencia de la jueza E. T., tenía que practicar actuaciones en la vista de 25 de marzo de 2019, junto con la explicación de si la ausencia de la jueza E. T. se debía a vacaciones (por descanso, por días para asuntos propios) o a otra ausencia justificada; 3) la diligencia de ordenación del presidente o vicepresidente de la sala fijando el plan de suplencias para el día 25 de marzo de 2019, y 4) la diligencia de ordenación de la jueza J. K. de 25 de marzo de 2019 asignándose el litigio XVI GC 932/18.
- 7 En respuesta al auto del Sąd Apelacyjny w W. de 11 de mayo de 2021, mediante escrito de 24 de mayo de 2021, la presidenta de la Sala XVI, de lo Mercantil, del Sąd Okręgowy w W. dio traslado al presidente del Sąd Apelacyjny w W. de los

autos del asunto XVI GC 932/18, a los que anexó los siguientes documentos: 1) una nota de servicio de 19 de mayo de 2021 del responsable de la Secretaría de la Sala XVI, de lo Mercantil, según la cual la diligencia de ordenación de la jueza J. K. de 25 de marzo de 2019 sobre la asunción del examen del asunto XVI GC 932/18 fue anexada por error a los autos de otro procedimiento; 2) una diligencia de ordenación de 25 de marzo de 2019 sobre la asunción del asunto XVI GC 932/18 por la jueza ponente J. K., y 3) una diligencia de ordenación de 25 de marzo de 2019 sobre la designación del juez de guardia (J. K.) para cubrir la sesión señalada para el 25 de marzo de 2019 en relación con la ausencia justificada de la jueza E. T.

- 8 Mediante diligencia de ordenación de 16 de junio de 2021, se devolvieron nuevamente los autos al tribunal regional para que este diera cumplimiento, en el plazo de tres días, al punto 2 del auto de 11 de mayo de 2021 en lo relativo a la explicación de si la ausencia de la jueza E. T. se debía a vacaciones (por descanso, por días para asuntos propios) o a otra ausencia justificada. Habida cuenta del incumplimiento en el plazo concedido de la diligencia de ordenación de 16 de junio de 2021, mediante auto de 29 de julio de 2021, el Sąd Apelacyjny w W. dio traslado al Prokurator Regionalny w Warszawie (Fiscal Regional de Varsovia), considerando necesaria su participación en la causa. Mediante escrito de 5 de agosto de 2021, la presidenta de la Sala XVI, de lo Mercantil, del Sąd Okręgowy w W. aclaró que la ausencia de la jueza E. T. el 25 de marzo de 2019 se debió a vacaciones por días para asuntos propios. Mediante escrito de 25 de agosto de 2021, el Fiscal Regional se personó en la causa.
- 9 El 20 de septiembre de 2021, se celebró la vista ante el órgano jurisdiccional de segunda instancia. El presidente informó a las partes sobre el problema jurídico resultante de la vulneración por el órgano jurisdiccional de primera instancia del principio de inmutabilidad de la composición del órgano jurisdiccional.
- 10 A fin de determinar las causas de la vulneración en el asunto XVI GC 932/18 del principio de inmutabilidad de la composición del órgano jurisdiccional, el Sąd Apelacyjny w W., mediante auto de 28 de septiembre de 2021, requirió al presidente del Sąd Okręgowy w W. para que presentara en el plazo de dos semanas la siguiente información: 1) los asuntos señalados por la jueza E. T. para la sesión de 25 de marzo de 2019, con indicación de sus números de referencia; 2) la aclaración de si la jueza J. K. asumió la sustitución en la vista en todos los asuntos señalados para la sesión de 25 de marzo de 2019; 3) la consignación de los números de referencia de los asuntos señalados para la sesión de 25 de marzo de 2019 que fueron asumidos para ser examinados por la jueza J. K. con arreglo al Reglamento de 2015 o que le fueron remitidos sobre otra base jurídica; 4) la indicación de si la jueza E. T. disfrutó en los años 2018 y 2019 de vacaciones por asuntos propios cuando tenía señaladas sesiones y, en caso afirmativo, indicación de las fechas de dichas sesiones y los números de referencia de los asuntos señalados para las diferentes fechas; 5) en caso de respuesta afirmativa a la pregunta n.º 4, aclaración de si en los días en los que la jueza E. T. disfrutó de vacaciones por asuntos propios la sustitución en las vistas fue asumida por la

jueza J. K.; 6) en caso de respuesta afirmativa a la pregunta n.º 5, indicación de si la jueza J. K., al ejercer la sustitución en las vistas, asumió cualquiera de los asuntos con arreglo al Reglamento de 2015; 7) el número de sesiones señaladas en los meses en los que la jueza E. T. disfrutó de vacaciones por asuntos propios en días de sesión, con aclaración de las fechas en que habían señaladas sesiones en cada uno de los asuntos en que la jueza E. T. disfrutó de vacaciones por asuntos propios. El presidente del Sąd Okręgowy w W. no proporcionó al Sąd Apelacyjny w W. ninguna información.

- 11 Mediante escrito de 18 de octubre de 2021, el presidente del Sąd Okręgowy w W., adjuntando una copia del auto del Sąd Apelacyjny w W. de 28 de septiembre de 2021, solicitó al presidente del Sąd Apelacyjny w W. que verificara si era procedente la obligación de aportar la información citada anteriormente.
- 12 Ni el presidente ni la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W. informaron al órgano jurisdiccional de segunda instancia sobre las actuaciones en el ámbito de la supervisión administrativa emprendidas en relación con el escrito anteriormente citado.
- 13 Mediante escrito de 1 de diciembre de 2021, el Sąd Apelacyjny w W. solicitó que el presidente del Sąd Okręgowy w W. considerara nuevamente dar cumplimiento al auto de 28 de septiembre de 2021. Mediante escrito de 29 de diciembre de 2021, el presidente del Sąd Okręgowy w W. informó que mantenía totalmente la postura expuesta en el escrito de 18 de octubre de 2021 que había dirigido al presidente del Sąd Apelacyjny w W., que la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W. declaró compartir en un escrito de 27 de octubre de 2021.
- 14 Mediante escrito de 7 de febrero de 2022, el Sąd Apelacyjny w W. solicitó a la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W. que considerara emprender actuaciones en materia de supervisión administrativa respecto del presidente del Sąd Okręgowy w W. para que este diera cumplimiento al auto del Sąd Apelacyjny w W. de 28 de septiembre de 2021. En el escrito en cuestión, se señaló que del escrito del presidente del Sąd Okręgowy w W. de 29 de diciembre de 2021 resultaba que la negativa de este a dar cumplimiento al auto de 28 de septiembre de 2021 había sido respaldada por la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W. en un escrito de 27 de octubre de 2021. El Sąd Apelacyjny w W. pidió que se presentara este último escrito ya que **su contenido** –en opinión de la formación judicial que iba a conocer del asunto– **guardaba relación con la injerencia, en el curso del procedimiento probatorio, de la autoridad que ejerce la supervisión sobre la actividad administrativa de un tribunal de apelación.** Además, informó de que el tribunal de apelación barajaba la posibilidad de plantear una cuestión jurídica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- 15 Mediante escrito de 24 de febrero de 2022, la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny, en respuesta al escrito de 7 de febrero de 2022, en la parte relativa a la solicitud de ese tribunal de que se emprendieran actuaciones de supervisión respecto del presidente del Sąd Okręgowy w W. para que este diera cumplimiento al auto del

Sąd Apelacyjny de 28 de septiembre de 2021, declaró que no le parecía que pudiera intervenir a este respecto, puesto que la información solicitada en el auto del tribunal de apelación no se pidió en el curso de la supervisión administrativa, sino que fue el órgano jurisdiccional el que la pidió. Asimismo, la vicepresidenta expresó su postura de que el alcance **de la información** solicitada en el auto de 28 de septiembre de 2021 **relativa a otros procedimientos judiciales va más allá de la conexión jurisdiccional con el asunto examinado y del ámbito competencial del presidente del órgano jurisdiccional**. La vicepresidenta no anexó el escrito de 27 de octubre de 2021.

- 16 Habida cuenta de la postura de la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W., la cual, según el tribunal de apelación, interfirió de forma ilegal en el curso del procedimiento probatorio de dicho tribunal y en las actuaciones en el marco de la supervisión administrativa respecto del juez ponente, el tribunal de apelación consideró que seguir el intercambio de la correspondencia con los órganos del tribunal solo llevaría a que el procedimiento se dilatará y que ello no contribuiría a dar cumplimiento al auto de 28 de septiembre de 2021.

Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal

- 17 La demandante alega ante el tribunal remitente la nulidad del procedimiento tramitado ante el órgano jurisdiccional de primera instancia con arreglo al artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil, debido a la incompatibilidad de la formación judicial de dicho órgano jurisdiccional que debía conocer del fondo con las disposiciones legales, ya que vulneró el principio de inmutabilidad de la formación de enjuiciamiento, al haber examinado el asunto la jueza J. K. en lugar de la jueza ponente E. T., elegida mediante sorteo en el sistema. La demandada señala que el artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil regula la composición del tribunal, pero no la composición de la formación que conocerá del fondo del asunto, lo que implica que no existe fundamento para declarar que la formación de enjuiciamiento constituida con infracción de los artículos 47a y 47b de la Ley de los Tribunales Ordinarios afecte *per se* a la validez del procedimiento. El fiscal ha manifestado que no hay motivo para que el órgano jurisdiccional de segunda instancia declare la nulidad del procedimiento con arreglo al artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta del tenor del artículo 55, apartado 4, de la Ley de los Tribunales Ordinarios, y que adoptar una postura divergente llevaría a anular la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia, a un nuevo sorteo, a repetir las diligencias de prueba ya practicadas y a dictar un fallo idéntico a la sentencia de 16 de septiembre de 2019.

Breve exposición de la motivación de la remisión

Motivación de la primera cuestión prejudicial

- 18 El artículo 19 TUE se refiere con mayor concreción al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE y confía a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial de que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables.
- 19 El principio de tutela judicial efectiva de los derechos, al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye un principio general del Derecho de la Unión que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y que en la actualidad se reconoce en el artículo 47 de la Carta (sentencias del TJUE: de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, apartado 51; de 16 de febrero de 2017, Margarit Panicello, C-503/15, EU:C:2017:126, apartado 37; de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:1 17, apartado [35]).
- 20 Todo Estado miembro debe garantizar concretamente, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que aquellos órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» —en el sentido definido por el ordenamiento jurídico de la Unión—, formen parte de su sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión y que, por tanto, puedan tener que resolver, en tal calidad, sobre la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión, cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva (sentencias del TJUE: de 18 de mayo de 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» y otros, C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 y C-397/19, EU:C:2021:393, apartado 190; de 20 de abril de 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, apartado [37]).
- 21 La exigencia de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, que reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho (sentencia del TJUE de 20 de abril de 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, apartado 51).
- 22 A este respecto, con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, los Estados miembros deberán establecer un sistema de vías de recurso y de procedimientos que garanticen a los justiciables el derecho a la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión (sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:1 17, apartado 34).

- 23 Las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Derecho de la Unión postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a la neutralidad de este ante los intereses en litigio (sentencia del TJUE de 20 de abril de 2021, *Repubblika*, C-896/19, EU:C:2021:311, apartado 53).
- 24 La exigencia de independencia comporta dos aspectos. El primero de ellos —aspecto externo— supone que el órgano ejerce sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia (sentencias del TJUE: de 17 de julio de 2014, *Torresi*, C-58/13 y C-59/13, apartado 22; de 6 de octubre de 2015, *Consorti Sanitari del Maresme*, C-203/14, apartado 19), estando así protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia en el enjuiciamiento por sus miembros de los litigios de los que conozca (sentencias del TJUE: de 19 de septiembre de 2006, *Wilson*, C-506/04, apartado 51; de 9 de octubre de 2014, *TDC*, C-222/13, apartado 30; de 6 de octubre de 2015, *Consorti Sanitari del Maresme*, C-203/14, apartado 19). El segundo aspecto —aspecto interno— se asocia al concepto de imparcialidad y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de aquel. Este aspecto interno exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la estricta aplicación de la norma jurídica (sentencias del TJUE: de 19 de septiembre de 2006, *Wilson*, C-506/04, apartado 52; de 9 de octubre de 2014, *TDC*, C-222/13, apartado 31; y de 6 de octubre de 2015, *Consorti Sanitari del Maresme*, C-203/14, apartado 20).
- 25 La exigencia de que el juez sea establecido por la ley es inherente al requisito de independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional, puesto que el sistema judicial debe regularse por el Derecho y ser independiente del Poder Ejecutivo, formando parte ambos requisitos del principio de legalidad y son indicativos de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al público (sentencia del TEDH de 12 de marzo de 2019, *A. c. Islandia*, recurso n.º 26374/18, § 99).
- 26 En relación con lo anterior, se plantea la duda, expresada en la primera cuestión prejudicial, de si puede considerarse órgano jurisdiccional independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, que garantiza la tutela judicial efectiva, al órgano jurisdiccional de primera instancia, que conoció del asunto en formación unipersonal, compuesta por un juez designado para examinar el asunto con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales.

- 27 El problema concierne sobre todo al hecho de si el concepto de órgano jurisdiccional independiente e imparcial establecido por la ley comprende también la «composición del tribunal» o la «composición del tribunal que conocerá del fondo del asunto», en la parte relativa a cómo se determina dicha composición.
- 28 El concepto de «composición del tribunal» no tiene una definición legal, ni en el Derecho nacional ni en el Derecho de la Unión Europea. En Derecho polaco, la precisión del concepto de composición del tribunal se lleva a cabo indicando el número de personas que compondrán la formación que conocerá del fondo del asunto. En el procedimiento tramitado ante el órgano jurisdiccional de primera instancia, las disposiciones prevén, como regla, el ejercicio unipersonal de la jurisdicción (artículo 47, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil). Se aplican excepciones en algunas categorías de asuntos, en los que conocen del fondo un juez, en condición de presidente, y dos jueces legos (artículo 47, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil), o facultan al presidente del órgano jurisdiccional para decidir que el asunto se examine en formación de tres jueces, si lo considera procedente debido a la particular complejidad del asunto o por ser este un precedente (artículo 47, apartado 3, del Código de Procedimiento Civil).
- 29 Para la independencia y la imparcialidad del órgano jurisdiccional establecido por la ley, se requiere que ejerzan en él jueces facultados ejercerá tal efecto en el órgano jurisdiccional de que se trate, en la instancia de que se trate y en el asunto de que se trate. Todo miembro de la formación que vaya a conocer del fondo del asunto deberá cumplir las citadas propiedades.
- 30 En el Derecho nacional, rige el principio de inmutabilidad de la formación que conoce del fondo del asunto (artículo 47a, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil). Este principio consiste en que los procedimientos se asignen a los jueces y a los jueces auxiliares de forma aleatoria, en el marco de determinadas categorías de asuntos. Se trata de un principio de rango legal, cuya esencia consiste en la estabilidad (inmutabilidad) de la composición del órgano jurisdiccional desde que se elige aleatoriamente la formación de enjuiciamiento y durante todo el procedimiento (artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.) [véanse las resoluciones del Sąd Najwyższy: de 5 de diciembre de 2019, III UZP 10/19, y de 1 de julio de 2021, III CZP 36/20].
- 31 El reparto aleatorio de los asuntos a los jueces y jueces auxiliares, en el marco de determinadas categorías de asuntos, tiene lugar mediante un sistema informático, que atribuye aleatoriamente los asuntos y tareas judiciales sobre la base de un generador de cifras aleatorias (Sistema Aleatorio de Reparto de Asuntos) (artículo 43, apartado 1, del Reglamento de 2015; artículo [2], punto 16, del Reglamento de 2019).
- 32 Las excepciones al principio de inmutabilidad de la composición configurada aleatoriamente se establecen taxativamente en la ley de organización (en particular, en el artículo 47b de la Ley de los Tribunales Ordinarios, conforme al

cual solo puede cambiarse la formación de un tribunal en caso de que no pueda examinarse un asunto en la composición actual o de que exista un impedimento duradero para que pueda examinarse el asunto en la composición actual) y en las disposiciones ejecutivas (artículos 49 y 52c del Reglamento de 2015). En la jurisprudencia del Sąd Najwyższy, se señala que la mera excepción a las reglas de designación de un juez en un procedimiento no significa que la composición del tribunal no sea legal (véase la resolución del SN de 16 de febrero de 2021, III CZP 9/20).

- 33 La idea subyacente es que la composición del tribunal viene determinada por la ley, mientras que las disposiciones del Reglamento del 2015 y del Reglamento de 2019 versan únicamente sobre la forma de determinar la formación que conocerá del fondo del asunto mediante la designación del juez por el sistema informático de reparto aleatorio de asuntos y tareas judiciales. En efecto, todo juez de un órgano jurisdiccional determinado está calificado para dirimir un asunto, con independencia de la forma en que haya sido designado para examinarlo. Por ello, pese a las deficiencias inherentes a la designación de la composición del órgano jurisdiccional, este sigue siendo un órgano jurisdiccional establecido por la ley, puesto que el juez sigue siendo juez y la formación de enjuiciamiento está compuesta por ese juez. El señalamiento de vistas a los jueces que ejercen en litigios civiles según una lista alfabética de jueces solo tiene un carácter organizativo, y la infracción de las normas que solo tienen un carácter organizativo e instructor no significa que una composición sea contraria a la ley (véase la resolución del SN de 16 de febrero de 2021, III CZP 9/20).
- 34 En opinión del tribunal de apelación, puede entenderse que una infracción simple (accidental, inconsciente, involuntaria, por error) de las disposiciones relativas a la forma de designación por sorteo de la formación de enjuiciamiento de un órgano jurisdiccional no supone un motivo para declarar que la composición de dicho órgano jurisdiccional es contraria a Derecho (artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil) y, por ello, debe declararse que el órgano jurisdiccional con una composición así configurada es un órgano jurisdiccional establecido previamente por la ley (artículo 47 de la Carta). La situación es distinta cuando la formación de enjuiciamiento del órgano jurisdiccional, compuesta por un juez designado para examinar un asunto, haya sido designada infringiendo de forma flagrante (cualificada) las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales.
- 35 **Las disposiciones que rigen la composición de un órgano jurisdiccional y la forma de determinación de dicha composición se guían por el objetivo último de proteger y garantizar la independencia judicial, evitando toda influencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el nombramiento de un juez determinado para conocer de un asunto y acuerdos entre los propios jueces de un determinado órgano jurisdiccional sobre cuál de ellos examinará un asunto concreto.** Aunque los Estados miembros tienen libertad para decidir cómo se efectuará la composición de un órgano jurisdiccional con arreglo a las

disposiciones nacionales, si se adoptan dichas disposiciones, la independencia del órgano jurisdiccional deberá quedar suficientemente garantizada (véanse las conclusiones del Abogado General E. Tanchev de 27 de junio de 2019, C-585/18, C-624/18 y C-625/18, punto 129). Dichas garantías –en opinión del tribunal de apelación– no solo afectan a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sino también al Judicial.

- 36 Según el tribunal de apelación, **no puede considerarse racionalmente que se está salvaguardando la independencia (autonomía e imparcialidad) de un órgano jurisdiccional cuando los propios jueces de un órgano jurisdiccional determinado —con la intención de perseguir intereses propios o ajenos utilizando instituciones del Derecho nacional de forma contraria a su objetivo— configuran la formación de enjuiciamiento del órgano jurisdiccional, designado con arreglo a la ley, infringiendo de forma cualificada las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales.**
- 37 En efecto, el fundamento del derecho a un proceso justo viene constituido por las garantías que definen el acceso al órgano jurisdiccional establecido por la ley y que tienen por objeto la configuración de su composición, cuya vulneración debe darse solo de forma excepcional, también respecto de las actuaciones no defectuosas. Por ello, debe considerarse que el derecho a un órgano jurisdiccional independiente e imparcial establecido por la ley comprende también la composición del órgano jurisdiccional constituido con arreglo a las disposiciones nacionales, de modo que se garantice su independencia y estabilidad. **El cumplimiento de dicho requisito solo puede tener lugar si el juez es nombrado para integrar la composición del órgano jurisdiccional (unipersonal, pluripersonal) con arreglo a las disposiciones de Derecho nacional, permitiéndose el cambio del juez dentro de los límites establecidos por dichas disposiciones, aunque se trate de disposiciones organizativas y ejecutivas.**
- 38 Puesto que la forma de designación de un juez para la formación que conocerá del fondo del asunto y el cambio del juez en dicha formación están sujetos a determinadas reglas del Derecho nacional, **la observancia de dichas reglas reviste una importancia fundamental para apreciar si el órgano jurisdiccional, incluida también la designación de su composición, es un órgano jurisdiccional establecido por la ley.** Aunque todos los jueces de un órgano jurisdiccional dado dispongan de las competencias adecuadas y estén idénticamente facultados para ejercer la jurisdicción, el hecho más esencial y con valor de garantía para las partes es que el asunto permanezca a cargo del juez ponente al que se le atribuyó de forma aleatoria, conforme al reparto de tareas efectuado mediante un instrumento informático sobre la base de un generador de cifras aleatorias. **Ello reviste importancia sobre todo desde el punto de vista de la garantía de la independencia del órgano jurisdiccional, incluida su independencia del factor administrativo, como los presidentes o**

vicepresidentes de sala y la imparcialidad de estos. Por tanto, si resulta flagrante la infracción de las reglas en cuestión, ello supone que dichas garantías se ven en gran medida reducidas. En efecto, el examen de un asunto por un juez designado a tal efecto con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales influye sobre la confianza de los ciudadanos y de la sociedad hacia el órgano jurisdiccional como órgano independiente e imparcial y sobre el sentido de garantía para las partes.

- 39 El tribunal de apelación afirma que el cambio de formación de enjuiciamiento del órgano jurisdiccional que conocía del asunto XVI GC 932/18 en primera instancia —cambio que consistió en que el asunto fue examinado por la jueza J. K. en lugar de por la jueza E. T., que había sido designada a tal efecto aleatoriamente mediante el sistema SLPS— se realizó con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales, es decir, el artículo 47b, apartado 1, de la Ley de los Tribunales Ordinarios, en relación con el artículo 52c, apartado 4, del Reglamento de 2015.
- 40 En primer lugar, las vacaciones por asuntos propios pedidas por la jueza ponente para el día de la sesión señalada no constituyen una imposibilidad ni un impedimento duradero para examinar el asunto en la composición actual (artículo 47b, apartado 1, de la Ley de los Tribunales Ordinarios). Pueden constituir un motivo para que practique las actuaciones la formación del órgano jurisdiccional designada conforme al plan de suplencias o al plan de guardias, si aboga por ello la agilidad del procedimiento y si la formación del órgano jurisdiccional al que se haya repartido el asunto no lo puede asumir (artículo 47b, apartado 2, de la Ley de los Tribunales Ordinarios). En la jurisprudencia del Sąd Najwyższy se ha declarado que no constituyen un motivo para apartarse del principio de inmutabilidad de la formación de enjuiciamiento de un órgano jurisdiccional las vacaciones planeadas para descanso (resolución del SN de 16 de febrero de 2021, III CZP 9/20), ni siquiera el traslado de un juez sin su consentimiento a otra sala del órgano jurisdiccional a raíz del cambio del reparto de actuaciones (auto del SN de 28 de febrero de 2020, III CSK 225/19).
- 41 En el asunto XVI GC 932/18, no concurrían supuestos de imposibilidad ni un impedimento duradero para examinar el asunto en la composición actual. El mencionado asunto fue examinado en tres fechas de sesiones señaladas a tal efecto. Aun aceptando que el 25 de marzo de 2019 existía un fundamento para que actuara la formación de enjuiciamiento del órgano jurisdiccional designada con arreglo al plan de suplencias en la persona de la jueza J. K., no había obstáculos para que, en las siguientes fechas de sesiones señaladas para celebrar la vista, la composición del órgano jurisdiccional incluyera a la jueza E. T., dado que su ausencia estaba motivada por vacaciones por asuntos propios.
- 42 En segundo lugar, el tribunal de apelación opina que la jueza J. K. no presentó una declaración escrita en la que asumiera el examen del asunto XVI GC 932/18 con

arreglo al artículo 52c, apartado 4, del Reglamento de 2015. Además, no es conforme a la verdad la declaración del responsable de la Secretaría de la Sala XVI del Sąd Okręgowy w W., recogida en la nota de servicio de 19 de mayo de 2021, según la cual la diligencia de ordenación de la jueza J. K. de 25 de marzo de 2019 sobre la asunción del examen del asunto XVI GC 932/18 fue anexada por error a los autos de otro procedimiento.

- 43 En tercer lugar, el cambio de juez ponente en el asunto XVI GC 932/18 no fue casual. Mediante diligencia de ordenación de 7 de febrero de 2019, la fecha de la vista, señalada para el 11 de marzo de 2019, se cambió al 25 de marzo de 2019. En la fecha en la que se dictó la diligencia de ordenación en cuestión, el plan de suplencias ya debía de estar redactado conforme a las normas (a más tardar hasta el 31 de enero de 2019). No hay ninguna prueba que dicho plan se redactara tras las diligencias de ordenación que cambiaron las fechas de las vistas en el asunto XVI GC 932/18. En otras palabras, en la fecha en que se dictó la diligencia de ordenación de 7 de febrero 2019, la jueza E. T., como vicepresidenta de la Sala XVI, de lo Mercantil, sabía que la jueza J. K. sería suplente el 25 de marzo de 2019 conforme al plan de suplencias. Por ello, la fecha de la vista en el asunto XVI GC 932/18 se fijó anulando la fecha anteriormente señalada, sin consignar el motivo de la anulación (las partes no solicitaron el cambio de fecha de la vista) y sin indicar quién sería el juez ponente que pasaría a integrar la formación que conocería del fondo del asunto el 25 de marzo de 2019.
- 44 En cuarto lugar, el cambio de juez ponente en el asunto XVI GC 932/18 fue deliberado. El señalamiento de la vista por la jueza E. T. para el 25 de marzo de 2019, es decir, el día en que era suplente la jueza J. K. y en que aquella disfrutaba de vacaciones por asuntos propios, pretendía crear la apariencia de que concurrían los requisitos del artículo 47b, apartado 1, de la Ley de los Tribunales Ordinarios. Debido a dicha acción, la jueza J. K., como suplente, examinó todos los asuntos señalados para la sesión de 25 de marzo de 2019. En ese caso, el instrumento informático debe atribuir al suplente un asunto menos de la misma categoría. Por otra parte, con arreglo al Reglamento de 2015, el presidente de sala debe acordar el reparto mediante el instrumento informático de un asunto adicional de la misma categoría, si el asunto es finalizado por el suplente. En el asunto XVI GC 932/18, no se dieron dichas situaciones. Del sistema SLPS resulta que no se llevó a cabo el cambio de juez ponente. Hasta el momento en que se dictó la sentencia del órgano jurisdiccional de primera instancia, la jueza E. T. aparecía en el sistema SLPS como juez ponente del asunto XVI GC 932/18.
- 45 En quinto lugar, el cambio de juez ponente en el asunto XVI GC 932/18 tenía una finalidad específica. Para el entorno judicial, este proceder es evidente. En una situación de hecho como la descrita, al asumir la jueza J. K. el examen de los asuntos señalados para el 25 de marzo de 2019 (incluido el asunto XVI GC 932/18), se produjo una reducción real del número de asuntos a cargo de la jueza E. T. Habida cuenta de que un empleado tiene derecho a cuatro días de vacaciones por asuntos propios por año natural y de que un juez de un tribunal regional puede

llegar a examinar de cinco a ocho asuntos en un día de sesiones, la carga de asuntos de la jueza E. T. podría haberse reducido de entre 20 a 36 asuntos.

- 46 En sexto lugar, los antecedentes de hecho no permiten determinar los criterios en función de los cuales la jueza E. T. eligió señalar la vista del asunto XVI GC 932/18 para el 25 de marzo de 2019 a fin de que su examen fuera encomendado a la jueza J. K.
- 47 Llegados a este punto, el tribunal de apelación llama la atención sobre **el riesgo de que se acepte esa conducta. Teóricamente, no puede excluirse que, en un asunto de gran interés social, los jueces acuerden entre sí que el asunto atribuido a uno de ellos sea asumido por otro juez; que, sobre esa base, el asunto se señale para el día de la guardia de ese otro juez, y que dicho juez asuma el asunto para su examen, por el hecho de que en ese día disfrute de vacaciones por asuntos propios el juez ponente designado para examinar el asunto mediante un sistema informático que reparte aleatoriamente los asuntos y las tareas del órgano jurisdiccional sobre la base de un generador de cifras aleatorias.**
- 48 En séptimo lugar, el tribunal de apelación llama la atención sobre la conducta atípica de las autoridades administrativas con respecto a actuaciones procesales adoptadas en el procedimiento civil por el juez ponente para apreciar los motivos del cambio de la formación que conocía del fondo del asunto XVI GC 932/18, como son: 1) la remisión por la presidenta de la Sala XVI, de lo Mercantil, del Sąd Okręgowy w W. de las resoluciones del Sąd Apelacyjny w W. para que el presidente del Sąd Apelacyjny tomara conocimiento de tales resoluciones; 2) la toma de conocimiento por la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W. del tenor del auto de 11 de mayo 2021 por medios no establecidos en la ley; 3) la falta de explicaciones por la presidenta de la Sala XVI, de lo Mercantil, del Sąd Okręgowy w W. sobre los motivos de la ausencia injustificada de la jueza E. T. y la aportación de explicaciones solo después de que el Sąd Apelacyjny w W. pusiera al corriente al fiscal; 4) la falta de cumplimiento del auto del Sąd Apelacyjny w W. de 28 de septiembre de 2021; 5) la injerencia de la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W. en el curso del procedimiento probatorio mediante la realización, en el marco de la supervisión administrativa, de la valoración del auto del Sąd Apelacyjny w W. de 28 de septiembre de 2022, excediéndose de la esfera jurisdiccional del órgano que ejerce la jurisdicción, lo que constituyó el fundamento para denegar el cumplimiento de dicho auto por el presidente del Sąd Okręgowy w W.; 6) el anuncio de la intervención de la vicepresidenta del Sąd Apelacyjny w W. en el marco de la supervisión administrativa a fin de comprobar la legalidad del reparto del asunto a la jueza J. K. solo después de que el Sąd Apelacyjny informara de su intención de plantear una cuestión jurídica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Motivación de la segunda cuestión prejudicial

- 49 En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, se torna pertinente responder a la segunda cuestión prejudicial.
- 50 A fin de velar para que el órgano jurisdiccional de segunda instancia pueda garantizar la tutela judicial efectiva que se exige con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es primordial preservar su independencia legal, como confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, que, entre las exigencias vinculadas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, menciona el acceso a un juez «independiente» (sentencia del TJUE de 18 de mayo de 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» y otros, C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 y C-397/19, EU:C:2021:393, apartado 194).
- 51 La organización de la Administración de Justicia de los Estados miembros corresponde a estos últimos. Sin embargo, al ejercer esta competencia, los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión. Este puede ser el caso, en particular, por lo que respecta a las normas nacionales relativas al control judicial pertinente de la formación que conoce del fondo del asunto (véase la sentencia del TJUE de 20 de abril de 2021, Repubblica, C-896/19, EU:C:2021:311, apartado 48).
- 52 En la jurisprudencia del Sąd Najwyższy, se ha declarado que una configuración de la formación que conoce del fondo del asunto contraria a las disposiciones relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales puede constituir el título para aplicar la sanción del artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil (véanse las resoluciones del SN de 5 de diciembre de 2019, III UZP 10/19, y de 16 de febrero de 2021, III CZP 9/20). Dicha sanción se incluye en el control judicial del órgano jurisdiccional de segunda instancia y constituye la única reacción adecuada para garantizar la tutela judicial efectiva.
- 53 La declaración por el órgano jurisdiccional de segunda instancia de la nulidad del procedimiento tramitado por el órgano jurisdiccional de primera instancia supone la anulación de la sentencia impugnada, dejando sin efecto el procedimiento en la parte afectada por la nulidad y consideran—do como inexistentes las actuaciones procesales llevadas a cabo ante dicho órgano jurisdiccional, así como —contrariamente a la postura del fiscal el examen del asunto por la jueza E. T., como juez ponente designado mediante el sistema SLPS como miembro de la formación que debía conocer del fondo del asunto.
- 54 Tras la entrada en vigor el 14 de febrero de 2020 de la Ley modificativa, el Sąd Najwyższy dictó, el 16 de febrero de 2021, la resolución III CZP 9/20, según la cual la vulneración del principio de inmutabilidad de la composición del órgano jurisdiccional designado para examinar una apelación, consistente en la designación indebida del suplente de un juez que no es ponente, puede dar lugar a que la formación de enjuiciamiento del órgano jurisdiccional sea contraria a Derecho (artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil). De la motivación de la resolución se desprende que el Sąd Najwyższy se pronunció

sobre la base de la situación legal anterior a la entrada en vigor del artículo 55, apartado 4, de la Ley de los Tribunales Ordinarios, manifiestamente sin tener en cuenta el contenido del artículo 8 de la Ley modificativa.

- 55 El tribunal de apelación explica que velar por la tutela judicial efectiva de las partes en caso de que se configure una formación de enjuiciamiento contraria a las disposiciones relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales —conforme al artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil— resulta imposible en la situación legal actual, debido al contenido del artículo 55, apartado 4, de la Ley de los Tribunales Ordinarios, en relación con el artículo 8 de la Ley modificativa.
- 56 En conclusión, debe constatar que el tribunal de apelación se ha visto privado de la posibilidad de aplicar la sanción jurídica efectiva que contiene el artículo 379, punto 4, del Código de Procedimiento Civil en caso de que se constate que la formación de enjuiciamiento de un órgano jurisdiccional se configuró de forma flagrantemente contraria a las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales.
- 57 Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, el tribunal remitente ha considerado pertinente plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las cuestiones jurídicas expuestas anteriormente. El tribunal remitente propone dar las siguientes respuestas a las cuestiones planteadas:
- 1) Los artículos 2, 6, apartados 1 y 3, y 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no es un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, que garantice la tutela judicial efectiva, un órgano jurisdiccional de primera instancia de un Estado miembro de la Unión Europea, cuya formación unipersonal esté compuesta por un juez de dicho órgano jurisdiccional que ha sido designado para examinar un asunto con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales.
 - 2) Los artículos 2, 6, apartados 1 y 3, y 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la aplicación de disposiciones de Derecho nacional, como el artículo 55, apartado 4, segunda frase, de la ustawa z 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, de 27 de julio de 2001) [...], en relación con el artículo 8 de la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2019 (Ley por la que se modifican la Ley de Organización de

los Tribunales Ordinarios, la Ley del Tribunal Supremo y Otras Leyes, de 20 de diciembre de 2019) [...], en la medida en la que prohíben al órgano jurisdiccional de segunda instancia declarar, con arreglo al artículo 379, punto 4, de la ustawa z 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil, de 17 de noviembre de 1964) [...], la nulidad del procedimiento tramitado en un órgano jurisdiccional de primera instancia en un asunto iniciado ante este, debido a que la composición de dicho órgano jurisdiccional es contraria a la ley, de que el órgano jurisdiccional está incorrectamente compuesto o de que forma parte de él una persona que no está facultada o que no es competente para ejercer la jurisdicción, como sanción jurídica que garantiza la tutela judicial efectiva en caso de que se haya designado un juez para conocer de un asunto con flagrante infracción de las disposiciones de Derecho nacional relativas al reparto de los asuntos y a la designación y modificación de la composición de los órganos jurisdiccionales.

DOCUMENTO DE TRABAJO